



CERTIFICACIÓN DE ACUERDO RELATIVO A INFORME

Acto que se certifica: Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 01 de abril de 2025, por el que se ha aprobado el siguiente:

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ADECUA EL MARCO NORMATIVO REGLAMENTARIO A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA 1/2025, DE 2 DE ENERO, DE MEDIDAS EN MATERIA DE EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

I.- ANTECEDENTES

1.- Mediante escrito del Secretario de Estado de Justicia, que ha tenido entrada en este Consejo General del Poder Judicial en fecha de 12 de febrero de 2025, se solicita informe al proyecto de Real Decreto por el que se adecúa el marco normativo reglamentario a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 561.1.6º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ). Con arreglo a lo previsto en el artículo 561.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), se solicita la emisión del informe con carácter urgente.

2.- La Comisión de Estudios e Informes del Consejo designó Ponentes de este informe a los vocales D. Luis Martín Contreras y D. José María Páez Martínez-Virel.

II.- CONSIDERACIONES SOBRE LA POTESTAD DE INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

3.- La potestad de informe del Consejo General del Poder Judicial a que se refiere el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en la redacción dada a dicho precepto por la LO 4/2013, de 28 de junio), tiene por objeto los anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten total o parcialmente, entre otras materias expresadas en el citado precepto legal, a "*Estatuto orgánico de los Letrados de la Administración de Justicia y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia*" y "*normas procesales o que afecten a aspectos jurídicos-constitucionales de la tutela ante los*



Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales" (reglas 5 y 6 del artículo 561.1 LOPJ).

4.- Atendiendo a este dictado, en aras a una correcta interpretación del alcance y sentido de la potestad consultiva que allí se prevé a favor de este Consejo, y considerado el contenido del Proyecto remitido, el informe que se emite se limitará al examen y alcance de las normas sustantivas o procesales que en él se incluyen específicamente, evitando cualquier consideración sobre cuestiones ajenas al Poder Judicial o al ejercicio de la función jurisdiccional que éste tiene encomendada.

5.- Cabe señalar que el Proyecto normativo que se ha sometido a informe de este órgano de gobierno del Poder Judicial tiene por objeto el desarrollo reglamentario de la Ley orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, contemplando, entre otros objetivos (según lo expuesto en la MAIN), *"modificar la regulación de determinadas cuestiones que afectan a diferentes normas reglamentarias que regulan aspectos organizativos y retributivos de los diferentes cuerpos funcionariales al servicio de la Administración de Justicia"*.

Todas ellas son reformas necesarias para implementar el modelo de Oficina Judicial, así como las Oficinas de Justicia en municipios reguladas en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tras la modificación operada en los artículos 436, 437, 438, 439 bis, 439 ter, 439 quinquies, 520 y 521 por la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia".

6.- La brevedad del proyecto y el que se aborden en él las oficinas de justicia en los municipios para la reforma organizativa de la Administración de Justicia en todos sus ámbitos, regulando además la conclusión de los trabajos de desarrollo e implantación de una Oficina Judicial adaptada a la nueva organización judicial, justifican que el presente informe se extienda al conjunto del Proyecto, con el objetivo de cumplir la primera función de la potestad de informe de este Consejo de coadyuvar a que las normas sobre estatuto orgánico de los Letrados de la Administración de Justicia y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, mantengan la adecuada perfección técnica y guarden la debida coherencia con los principios constitucionales.

7.- Sin perjuicio de lo anterior, y con arreglo al principio de colaboración entre los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial ha venido indicando la oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones relativas, en particular, a cuestiones de técnica legislativa o de orden terminológico, con el fin de contribuir a mejorar la corrección de los textos normativos y, por consiguiente, a su efectiva aplicabilidad en los procesos judiciales, por cuanto son los órganos jurisdiccionales quienes, en última



instancia, habrán de aplicar posteriormente las normas sometidas a informe de este Consejo, una vez aprobadas por el órgano competente.

III.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO

8.- El proyecto consta de un Preámbulo, dos capítulos, cuatro artículos, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales. En el preámbulo del proyecto se contiene las razones del mismo, diciendo que por acuerdo de 8 de enero de 2025 se pactó la modificación de la disposición transitoria primera del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia y de los artículos 39 y 39 bis del Reglamento en orden a la identificación de determinados puestos en las relaciones de puestos de trabajo. Así, los puestos de trabajo de los servicios comunes de tramitación de las Audiencias Provinciales y del servicio común de tramitación de la Audiencia Nacional; los de las áreas en que se dividan los servicios comunes y, también, los de los equipos de trabajo, cuando estén integrados por más de cincuenta efectivos.

9.- Además, se aborda el desarrollo reglamentario de los artículos 439 ter, 439 quater y 439 quinquies, especialmente en lo referido a la forma de constitución de la Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios y régimen de sustituciones del personal de la Administración de Justicia que preste servicios en estas nuevas Oficinas de Justicia.

10.- En el capítulo uno, que comprende los artículos primero a tercero, se aprueba la modificación del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia; del Real Decreto 1033/2007, de 20 de julio, por el que se determinan los puestos tipo de las unidades que integran las oficinas judiciales y otros servicios no jurisdiccionales y sus correspondientes valoraciones, a efectos del complemento general de puesto de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y del Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al Servicio de Secretarios Judiciales a efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función.

11.- En el capítulo dos, que comprende el artículo cuarto, se aprueba el Reglamento de las Oficinas de Justicia en los municipios y de las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios, desarrollando la regulación contenida en los artículos 439 ter, 439 quater y 439 quinquies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.



12.- El texto termina con una Disposición adicional, tres Disposiciones transitorias, una Disposición derogatoria y tres Disposiciones finales.

IV.- CONSIDERACIONES GENERALES

13.- Tras más de doce años de anteproyectos y proyectos fallidos, finalmente se aprobó la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, con la que se introduce reformas en dos grandes ámbitos, el organizativo y el procesal; reformas basadas en la digitalización, la modernización de sus estructuras y la vocación social de la Justicia, que ya se inició con la aprobación de los RD-Ley 5/2023 y 6/2023 y de la LO 5/2024, del Derecho de Defensa.

14.- La Ley entra en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE (3 de abril de 2025). El título I (referido a la modificación de la LOPJ), la Disposición Adicional Primera, las Disposiciones Transitorias Primera a Octava, y la Disposición Final Sexta a los veinte días de su publicación, esto es, el 23 de enero de 2025. La atribución de competencias en materia de violencia sexual a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, prevista en el apartado veintiocho del artículo 1, así como las modificaciones del artículo 14 LECR, del apartado uno del artículo veinte de la 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y de la letra h) del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia Jurídica Gratuita, entrarán en vigor a los nueve meses de su publicación, esto es, el 3 de octubre de 2025.

15.- Fruto de esta norma, por Acuerdo de 8 de enero de 2025 el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y organizaciones sindicales asumió el compromiso de realizar modificaciones reglamentarias que permitieran un diseño más adaptado de las oficinas judiciales de los diferentes partidos judiciales al nuevo modelo organizativo, y un acoplamiento que garantice la continuidad en la prestación del servicio y el aprovechamiento de la experiencia profesional previa en orden a la asignación de los puestos de trabajo de la nueva organización.

16.- Pues bien, como complemento a la implantación de la organización judicial, en el primer nivel del sistema judicial, la LO 1/2025 modifica el Libro V de la LOPJ para acomodar el diseño de la Oficina Judicial a la nueva organización. El artículo 435 LOPJ, que en este aspecto no ha sido modificado por la LO 1/2025, establece que la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales, y que tendrá una estructura básica homogénea en todo el territorio nacional basada en los principios de jerarquía, división de funciones y coordinación.



17.- De manera sucinta cuatro son los pilares de la nueva oficina judicial: edificios judiciales adaptados, nuevas tecnologías, ampliación de recursos humanos, y legislación reguladora de las mismas. Sin embargo, siendo condiciones necesarias se han demostrado que no son suficientes ya que, como consta en el Plan Justicia 2030 *“no solo es cuestión de recursos económicos y humanos, el problema es la falta de eficiencia”*. Por tanto, un conjunto de elementos debe concurrir de forma paralela, y habrá de postular un cambio de paradigma en la forma de gestionar la organización, que nadie pone en duda que es compleja, por parte de las distintas administraciones implicadas. Sirva como ejemplo que en materia de edificios judiciales pese a haberse llevado a cabo un Conferencia Sectorial de Justicia el 25 de noviembre de 2022 para establecer modelos de referencia para el diseño de los Edificios judiciales, el Consejo no ha sido oído.

18.- La reforma organizativa, que se residencia en el Título I de la LO 1/2025, pretende favorecer la especialización y mejorar la gestión de recursos, creando los Tribunales de Instancia, un órgano colegiado que integra todos los Juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización de cada partido judicial; de modo que, según nota de prensa del Ministerio de Justicia de 19 de diciembre de 2024, los 3.800 juzgados unipersonales se transformarán en 431 Tribunales, favoreciendo la especialización, la unificación de criterios y permitirá distribuir adecuadamente las cargas de trabajo y compartir recursos. La ley también crea las Oficinas de Justicia en los Municipios, como evolución de los actuales Juzgados de Paz, las cuales serán el punto de contacto directo entre los ciudadanos y la Administración de Justicia, y, así en ellas se podrán realizar toda una serie de actos y trámites procesales de manera telemática desde allí sin tener que desplazarse a una capital de provincia; de otra parte, se mantienen los Jueces y las Juezas de paz; finalmente, la ley regula, de manera complementaria, la conclusión de los trabajos de desarrollo e implantación de una Oficina Judicial adaptada a esta nueva organización judicial.

19.- En definitiva, según la propia Exposición de Motivos de la LO 1/2025, se pretende obtener la eficiencia organizativa entendida como la que concurre en aquella estructura que, optimizando los recursos disponibles, se muestra apta para la obtención de sus objetivos. De todas las cualidades que aportan valor a una organización eficiente, la LO comentada se concentra en tres de ellas: la especialización, la homogeneidad y la capacidad organizativa.

20.- Por lo que se refiere a la reforma procesal, que se residencia en el Título II de la LO 1/2025, contiene un gran bloque de reformas en la línea de las modificaciones ya introducidas por el RD-Ley 5/2023, de 28 de junio, y el RD-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, que pretenden agilizar la carga de trabajo de juzgados y tribunales y, a tal efecto, en el capítulo I, se incluyen modificaciones en materia procesal haciendo una clara apuesta por los métodos adecuados de solución de controversias (MASC) en vía jurisdiccional en los ámbitos civil y mercantil; en el Capítulo II se contienen reformas



procesales tendentes a una mayor agilización en la tramitación de los procedimientos judiciales que afectan a todos los órdenes jurisdiccionales.

21.- Como ya hemos puesto de manifiesto, en el Capítulo I del Real Decreto que se informa, se aprueba la modificación del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia; del Real Decreto 1033/2007, de 20 de julio, por el que se determinan los puestos tipo de las unidades que integran las oficinas judiciales y otros servicios no jurisdiccionales y sus correspondientes valoraciones, a efectos del complemento general de puesto de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y del Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por sustitución que impliquen el desempeño conjunto de otra función.

22.- Todas estas modificaciones suponen que se habrá de acometer una reforma organizativa de la Administración de Justicia, mediante la creación y constitución de los Tribunales de Instancia, la evolución de los Juzgados de Paz a modernas Oficinas de Justicia en los municipios, y el desarrollo e implantación de una Oficina Judicial adaptada a esta nueva organización judicial, mediante la racionalización del modelo existente y la búsqueda de la eficiencia. A tal efecto se persigue la especialización de Jueces y Juezas, Magistrados y magistradas, así como de medios personales; la homogeneidad de prácticas y comportamientos de los órganos judiciales y de las oficinas judiciales; y la capacidad organizativa, para ser capaz de adaptar de forma flexible su respuesta a las necesidades cambiantes de la sociedad.

23.- Así, la configuración de los Tribunales de Instancia simplifica el acceso a la Justicia. Esta nueva organización implica la existencia de un único tribunal asistido por una única organización "instrumental" (Oficina Judicial) que le dará soporte. No existirán, por tanto, Juzgados con su propia y singular forma de funcionamiento. Mediante los mecanismos de interrelación que la ley establece entre el Tribunal de Instancia y la Oficina judicial se corregirán las disfunciones derivadas de las diferentes formas de proceder en aspectos puramente organizativos y procedimentales.

24.- A ello, contribuirán las nuevas tecnologías que ofrecen medios y posibilidades organizativas, así como herramientas informáticas muy desarrolladas que permitan la evolución de las formas de documentación, gestión y tramitación del procedimiento, transitando del expediente en papel, al expediente judicial electrónico y sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación digital de todo tipo de procedimientos, haciendo posible la comunicación telemática, tanto interna como externa.



25.- Es con la LO 1/2025 con la que se redefine la morfología de la Oficina Judicial, estableciendo en el art. 435.1 LOPJ que es una *“organización de carácter instrumental de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales”*, cuya estructura *“será homogénea en todo el territorio nacional como consecuencia del carácter único del Poder al que sirve”* (art. 435.2 LOPJ). Y en el art. 436 LOPJ que su actividad, definida por la aplicación de las leyes procesales, se desarrollará a través de los servicios comunes y los otros servicios procesales que se determinen -art. 438 LOPJ-.

26.- En lo que al objeto de este Informe se refiere, en lo relativo a la organización de la denominada Administración de la Administración de Justicia, actualmente conviven dos grandes modelos: el modelo “tradicional”, es decir, un juez o jueza, un Letrado o Letrada de la Administración de Justicia y varios/as funcionarios/as, todos ellos en esa única unidad judicial; y el que se denominó (Nueva) Oficina Judicial (NOJ), cada vez menos nueva, si atendemos al tiempo transcurrido desde su implantación.

27.- El Real Decreto que se informa tiene por objeto modificar la regulación de determinadas cuestiones que afectan a diferentes normas reglamentarias que regulan aspectos organizativos y retributivos de los diferentes cuerpos funcionariales al servicio de la Administración de Justicia.

28.- Todas ellas son reformas necesarias para implementar el modelo de Oficina judicial, así como las Oficinas de Justicia en los municipios reguladas en la LOPJ, tras la modificación operada en los arts. 436, 437, 438, 439 bis, 439 ter, 439 quater, 439 quinquies, 520 y 521, por LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Por tanto, obedece a la necesidad de realizar aquellas modificaciones orientadas a facilitar el desarrollo del nuevo modelo organizativo y los procesos de acoplamiento de todo el personal. Esta necesidad de reforma se ha hecho patente en el acuerdo entre la Administración del Estado y las organizaciones sindicales firmado el pasado 8 de enero de 2025.

29.- El procedimiento de tramitación ha de ser el de urgencia para hacer factible la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de estas oficinas de la Administración de Justicia adaptadas a la nueva organización judicial y funcional.

30.- El actual proceso de modernización de la Administración de Justicia se inició con la LO 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la LOPJ, fruto del Pacto de Estado por la Justicia de 2001, que introduce en los artículos 435 y siguientes LOPJ un nuevo modelo de oficina judicial, radicalmente distinto al que existía entonces, y que ha pervivido hasta la actualidad. A nivel legislativo, dicho proceso de transformación se estima culminado con la promulgación de la ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.



31.- Es necesario destacar que el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, introdujo modificaciones en el régimen retributivo, en aplicación de la disposición final tercera de la ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras Judicial y Fiscal, que dispone que el Gobierno habría de regular un nuevo régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios y Secretarias Judiciales, hoy Letrados y Letradas de la Administración de Justicia, adecuado a los principios y conceptos retributivos recogidos en dicha ley y en sus anexos. Esta última Ley ha sido objeto de modificación por mor de la Disposición final decimotercera de la LO 1/2025, si bien, como ya sugería este órgano constitucional, en su acuerdo de su Comisión Permanente, de fecha 17 de febrero de 2022, ratificado por unanimidad posteriormente por el Pleno, dentro del informe al Proyecto de Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, dadas las competencias asumidas por el colectivo de letrados de la Administración de Justicia, su sistema retributivo debería ser revisado, en la línea de lo dispuesto en la disposición final tercera de la ley 15/2003 y su regulación incorporada a esta norma, afirmándose en aquél *"En concreto, la redacción dada por la citada Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, al art. 447 LOPJ, pretendió coadyuvar a la adecuación de los conceptos retributivos de los Letrados de la Administración de Justicia a los de las retribuciones básicas de las Carreras Judicial y Fiscal, redefiniendo la estructura de las retribuciones complementarias de este Cuerpo, mediante la desaparición del complemento de destino, la introducción del complemento general del puesto, y el establecimiento de un nuevo complemento específico adaptado a la nueva ordenación de puestos en la Oficina Judicial. Con posterioridad, la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial vendría a introducir el complemento de carrera profesional, destinado a retribuir la progresión alcanzada por la persona funcionaria dentro del sistema de carrera horizontal"*.

32.- De la misma forma, se afirmaba en aquél informe que la situación de representación y negociación de los LAJ *"responde a un estado de situación quizá no conveniente aunque sí explicable en atención a las responsabilidades y tareas que los Letrados de la Administración de Justicia despliegan en el ejercicio de sus funciones, que los sitúa en el complicado estatus de trabajadores públicos y, a la vez, titulares de potestades de dirección y organización sobre el resto del personal de justicia de cada unidad u oficina judicial desde una posición jerárquicamente predominante, dotando a esa compleja relación de una patente diversidad de intereses laborales y profesionales, asumidos a veces como opuestos y hasta confrontados"*. Esta situación recomienda una regulación específica para este colectivo.

33.- Así pues, desde la aprobación de estas normas, consecuencia del proceso de modernización de la Justicia iniciado con el Pacto de Estado



firmado el 31 de mayo de 2001, cabe sostener que se ha pretendido una equiparación entre el régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal y el establecido para los Letrados y Letradas de la Administración de Justicia en cuanto a principios y conceptos retributivos, en el marco del nuevo modelo de Oficina Judicial que empezaba a diseñarse y que requería de reformas organizativas de las relaciones profesionales y estructura de trabajo, con el establecimiento de nuevos modelos de carrera que precisaban, a su vez, de cambios del sistema retributivo.

34.- En efecto, en este proceso, la aprobación de la LO 19/2003, de 23 de diciembre constituyó un paso sustancial, en el Libro V la regulación de la nueva oficina judicial y los aspectos estatutarios, funcionales y orgánicos más relevantes al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, es por ello que le dedica una regulación aparte del resto de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, atribuyéndole nuevas funciones procesales, potenciando sus capacidades profesionales y asignándole responsabilidades de coordinación con las Administraciones Públicas competentes en materia de justicia, lo que justifica claramente la modificación del sistema retributivo.

35.- Al mismo tiempo, esta Ley, conforme a la nueva redacción con la que dotó al art. 447 LOPJ, restringió la adecuación de los conceptos retributivos de los Letrados y las Letradas de la Administración de Justicia a los de las retribuciones básicas de las Carreras Judicial y Fiscal, redefiniendo la estructura de las retribuciones complementarias de este Cuerpo, mediante la desaparición del complemento de destino, la introducción del complemento general del puesto, y el establecimiento de puestos en la nueva Oficina Judicial.

36.- Es por ello que, conforme a la citada LO, el desarrollo de la nueva oficina judicial exigió la reforma del régimen retributivo de los Letrados y Letradas de la Administración de Justicia, y obligó a establecer un catálogo de puestos tipo que sería el punto de partida de las relaciones de puestos de trabajo, al establecimiento de un complemento general del puesto, que se fijaría por Ley General de Presupuestos, y a la determinación de la asignación inicial del complemento específico que debían recogerse en un nuevo sistema retributivo (Real Decreto).

37.- Con estos objetivos nace el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia. En él, además, se aborda la regulación de cuestiones que no afectan directamente al nuevo diseño de la oficina judicial. Así, sucede con las retribuciones que procedan por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función, que, conforme a lo previsto en la LOPJ, debían ser objeto de regulación en este Real Decreto.



38.- Como consecuencia de la reforma de la LOPJ, se evidenció la necesidad de adaptar el régimen retributivo de estos cuerpos a las previsiones de la NOJ, lo que se llevó a cabo a través del Real Decreto 1033/2007, de 20 de julio, por el que se determinan los puestos tipo de las unidades que integran las oficinas judiciales y otros servicios no jurisdiccionales y sus correspondientes valoraciones, a efectos de complemento general del puesto de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, el cual también es objeto de modificación con el objeto de establecer los puestos tipo de las distintas unidades que integran las oficinas judiciales y otros servicios no jurisdiccionales y sus correspondientes valoraciones, a efectos del complemento general de puesto.

39.- El desarrollo de las previsiones de esta LO 19/2003 propició la aprobación del Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos del complemento general del puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función. Este Real Decreto aborda, en consecuencia, el establecimiento de un catálogo de puestos tipo que será el punto de partida de las relaciones de puestos de trabajo, el establecimiento de un complemento general del puesto, que se fijará por Ley General de Presupuestos, la determinación de la asignación inicial del complemento específico que también se recogen en este Real Decreto y que sustituyen a los correspondientes conceptos retributivos contenidos en el Real Decreto 1130/2003, y las retribuciones que procedan por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función. Este Real Decreto es también objeto de modificación por el Proyecto que se informa.

40.- Sin perjuicio de las observaciones que luego se formularán, y de las discrepancias puntuales que puede suscitar el Real Decreto objeto de Informe, se trata de un texto que, aparentemente, se adapta al fin que persigue, respecto del despliegue de la LO 1/2025.

V.- CONSIDERACIONES PARTICULARES

A. Modificación del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia

41.- El Proyecto de Real Decreto objeto de informe modifica el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, en varios preceptos.



A.1 Artículo 39. Centros de destino

- 1. Se entenderá por centro de destino lo previsto en el artículo 521 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.*
- 2. Corresponde a los Secretarios Coordinadores Provinciales la organización y distribución del trabajo a todo el personal destinado en los servicios comunes de la Oficina Judicial, en los términos previstos en el apartado e) del artículo 18 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por Real Decreto 1608/2005. La expresada organización se ajustará al modelo previsto en la resolución dictada por la Administración competente para definir la estructura de la expresada Oficina, y podrá venir recogida en el protocolo de funcionamiento a que se refiere el apartado n) de aquel mismo precepto.*
- 3. La ordenación del personal a través de las relaciones de puestos de trabajo se realizará definiendo en los distintos centros de destino que se creen las funciones a desempeñar por cada uno de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia de conformidad con lo previsto en los artículos 476, 477 y 478 LOPJ.*
- 4. No obstante lo previsto en el apartado anterior, la persona responsable de la dirección o jefatura de la unidad o centro de destino podrá, por necesidades del servicio, mediante resolución motivada y con carácter temporal, atribuir la realización de cualquiera de las funciones propias del cuerpo, para el mejor funcionamiento de dichas unidades, a los funcionarios que ocupen con carácter definitivo puestos de trabajo genérico”.*

42.- En el artículo 39, regulación relativa a los centros de destino, remitiéndose el precepto a lo dispuesto en el art. 521 LOPJ para definir centro de destino, pues en la LO 1/2025, con la vocación, según se dice en la Exposición de Motivos, de extender un modelo de Oficina judicial adaptada a la nueva organización judicial y a todos los tribunales, se incluye en el artículo 521 como centros de destino en el ámbito de la Oficina Judicial, el servicio común de tramitación del Tribunal Supremo, los de la Audiencia Nacional y del Tribunal Central de Instancia, de cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia y el conjunto de servicios comunes de tramitación que, sin estar comprendidas en los anteriores, radiquen en un mismo municipio, así como cada uno de los servicios comunes procesales que se constituyan.

43.- De hecho, en el art. 438 LOPJ se mantiene la regulación de los “otros” servicios comunes procesales diversos que por parte del Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas se puedan crear. Así, tanto Ministerio como Comunidades Autónomas con competencias asumidas, serán competentes para el diseño, creación y organización de servicios comunes que realicen las funciones de registro y reparto, de apoyo, actos de comunicación, auxilio judicial nacional e internacional, de ordenación de procesos de ejecución y jurisdicción voluntaria, que, también se podrán



subdividir en áreas y equipos, si bien en estos servicios no se realizarán funciones de ordenación de la fase declarativa de los procedimientos. Las Salas de Gobierno, las juntas de Jueces y Juezas y los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia podrán solicitar al Ministerio de Justicia y a las Comunidades autónomas la creación de servicios comunes conforme a las necesidades específicas. Asimismo, se podrán crear otros servicios comunes procesales que asuman otras funciones distintas, en cuyo caso será preciso el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, es decir, la LOPJ establece expresamente un ámbito material de los servicios comunes y prevé que, si éstos se despliegan sobre cualquier otro ámbito, la creación de estos servicios debe ser autorizada por este órgano constitucional.

44.- Los Servicios Comunes de Tramitación se diseñan, ahora, por las CCAA con competencias asumidas, o en su caso, por el Ministerio de Justicia, como administraciones prestacionales, que *prima facie*, a través de las relaciones de puestos de trabajo y la disponibilidad de medios materiales y arquitectónicos, determinarán en gran parte, el alcance y la operatividad de dichos servicios.

45.- De los nuevos arts. 436 y 437 LOPJ se deriva que el servicio común de tramitación, dentro de la Oficina Judicial, es un servicio fundamental, en cuanto *"unidad de la Oficina Judicial que realiza todas las funciones requeridas para la ordenación del procedimiento..."* -art 437.1-. Además, es un servicio imprescindible, que asiste no sólo a los Tribunales de Instancia, sino también a los demás órganos judiciales, por cuanto el artículo 437.2 LOPJ establece que *"...para el cumplimiento de las funciones previstas en el apartado anterior el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, cada Tribunal Superior de Justicia, cada Audiencia Provincial y cada Tribunal de Instancia, así como el tribunal Central de Instancia, serán asistidos por un servicio común de tramitación en la correspondiente oficina judicial"*.

46.- El Tribunal Supremo en sentencia de 19 de septiembre de 2021 reconoce, aunque de forma indirecta, el valor de los servicios comunes, al plantearse en el recurso de casación si tras el requerimiento efectuado para iniciar el recurso mediante demanda en un procedimiento abreviado, la presentación de ésta por LexNet en la Oficina de Registro y Reparto Contencioso-Administrativo, no ante el Juzgado requirente, puede determinar la inadmisión y el archivo del recurso. Y resuelve que, partiendo de que se está en presencia de una cuestión que incide directamente en el derecho de acceso a la jurisdicción, que se enmarca en el derecho a la tutela judicial efectiva, declara la Sala que la presentación del escrito de demanda dentro del plazo legalmente establecido, efectuada por LexNet en la Oficina del Registro y Reparto Contencioso Administrativo, y no ante el Juzgado requirente, pero con indicación expresa del Juzgado destinatario, no puede determinar la inadmisión y archivo del recurso, por ser esta solución



manifiestamente desproporcionada, y, por tanto, vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva.

47.- Según el art 436.8 LOPJ todos los servicios comunes, asistirán a jueces y juezas, letrados y letradas de la Administración de Justicia para el ejercicio de las funciones que les son propias, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones se dicten. Los jueces y juezas podrán requerir en todo momento a la oficina judicial cuanta información consideren necesaria sobre los procedimientos cuyo conocimiento tengan atribuido. Así bien, los diversos Presidentes y Presidentas de los Tribunales de Instancia coordinarán junto al LAJ-Director/a del Servicio Común de Tramitación el funcionamiento del Tribunal pudiendo adoptar las resoluciones precisas que, desde el punto de vista organizativo, sean necesarias para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional en el ámbito organizativo y funcional que le es propio. El LAJ-Director/a, en coordinación con el/la Presidente/a o Magistrado/a respectivo/a podrá dar las órdenes oportunas al resto de LAJ teniendo en cuenta la organización de los recursos humanos del Servicio Común de Tramitación. Igualmente cumplirá, las órdenes y circulares que reciba de sus superiores jerárquicos.

48.- Por otro lado, se prevé en la nueva redacción del artículo 39, en su número 2, que es a los Secretarios/as Coordinadores/as Provinciales a quienes corresponde la organización y distribución del trabajo a todo el personal destinado en los servicios comunes de la Oficina Judicial, lo que se halla en consonancia con lo previsto en el artículo 18 e) del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por RD 1608/2005, precepto este último que también tendría que modificarse en adaptación a la nueva Oficina Judicial.

49.- Dicha organización se habrá de ajustar al modelo previsto en la resolución dictada por la Administración competente para definir la estructura de la expresada Oficina, y podrá venir recogida en el protocolo de funcionamiento a que se refiere el apartado n) del precepto referido, según el cual los Secretarios Coordinadores Provinciales tienen encomendada la función de *"Elaborar cuantos protocolos de carácter técnico procesal sean necesarios para el correcto funcionamiento de las Oficinas judiciales de su provincia, según lo establecido en el artículo 8 de este Reglamento, pudiendo también hacer suyos o enmendar los protocolos propuestos por los Secretarios Judiciales que dirijan los Servicios Comunes Procesales"*.

50.- Esta atribución de competencia a los/as Secretarios/as Coordinadores/as supone un acierto, pues en este nuevo modelo de Oficina Judicial es preciso determinar que operador/a u operadores/as jurídicos han de dinamizar y gestionar la actividad organizativa. Ni Presidentes/as de Tribunal de Instancia estarán exentos/as o rebajados/as de ejercitar sus funciones jurisdiccionales, ni LAJ-Director/a, de ejercitar sus diversas funciones. En esta situación el/la Secretario/a Coordinador/a Provincial



resulta una figura idónea para realizar esta actividad, y elaborar el “material organizativo” con conocimiento e intervención prioritaria de Presidentes/as de Tribunal de Instancia correspondientes, con ayuda de la Administración prestacional y con la necesaria validación y aprobación del Secretario/a de Gobierno correspondiente.

51.- Su número 3 se deja en su actual redacción, aunque hay que tomar en consideración que remite, en lo relativo a que la ordenación del personal a través de las relaciones de puestos de trabajo se realice definiendo, en los distintos centros de destino que se creen, las funciones a desempeñar por cada uno de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, a lo previsto en los artículos 476, 477 y 478 LOPJ, todos ellos modificados por la LO 1/2025, redefiniéndose algunas de las funciones encomendadas al personal de la Administración de Justicia para acomodarlas a la prestación de servicios en las Oficinas de Justicia en los municipios.

52.- Así en el artículo 476 se dice que corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa colaborar en la actividad procesal de nivel superior, así como la realización de tareas procesales propias. Y así, con carácter general y bajo el principio de jerarquía, y sin perjuicio de funciones concretas del puesto de trabajo que desempeñen, le corresponde según el nuevo apartado g) *“Ocupar, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, las jefaturas en que se estructuran los servicios comunes procesales, en las que, sin perjuicio de realizar las funciones asignadas al puesto concreto, gestionarán la distribución de las tareas del personal, respondiendo del desarrollo de las mismas”*. En su apartado h) *“Colaborar con los órganos competentes en materia de gestión administrativa, y desempeñar funciones relativas a la gestión del personal y medios materiales, de la unidad de la Oficina judicial u Oficina de Justicia en el municipio en que se presten los servicios, siempre que dichas funciones estén contempladas expresamente e la descripción que la relación de puestos de trabajo efectúe del puesto de trabajo”*. Y en su apartado i) *“Desempeñar la Secretaría de las Oficinas de Justicia en los municipios, así como los restantes puestos de trabajo adscritos al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, todo ello de conformidad con lo que se determine en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, así como desempeñar puestos de las unidades administrativas, cuando las relaciones de puestos de trabajo de las citadas unidades así lo establezcan, siempre que se reúnan los requisitos de conocimiento y preparación exigidos para su desempeño”*.

53.- Por su parte, en el artículo 477 LOPJ referido a las funciones que corresponden al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, se ve modificado su apartado h) *“La realización de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias. Entre estas*



funciones se encuentra el apoyo a la gestión administrativa, y de gestión del personal y medios materiales, de la unidad de la Oficina judicial u Oficina de Justicia en el municipio en que se presten los servicios, siempre que dichas funciones estén contempladas expresamente en la descripción de la relación de puestos de trabajo”.

54.- Y, por último, en el artículo 478 referido al Cuerpo de Auxilio Judicial, se redacta por LO 1/2025, su letra i) *“La realización de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a todas las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias. Entre estas funciones se encuentra el auxilio a la gestión administrativa, y de gestión del personal y medios materiales, de la unidad de la Oficina judicial u Oficina de Justicia en el municipio en que se presten los servicios, siempre que dichas funciones estén contempladas expresamente en la descripción de la relación de puestos de trabajo”.*

55.- Finalmente, en el apartado 4 del artículo 39 la modificación viene acompañada por la notable mejora del precepto, en lo relativo a que introduce lenguaje inclusivo pasando de decir *“el jefe o responsable de la unidad o centro de destino”* a *“la persona responsable de la dirección o jefatura de la unidad o centro destino”*. Además, introduce que la atribución de la realización de cualquiera de las funciones propias del cuerpo, para el mejor funcionamiento de dichas unidades, a los funcionarios y funcionarias que ocupen con carácter definitivo puestos de trabajo genéricos, se habrá de hacer mediante resolución motivada y con carácter temporal.

A.2 Artículo 39 bis. Relaciones de puestos de los servicios comunes

1. *Las relaciones de puesto de trabajo de los servicios comunes que radiquen en el mismo municipio deberán identificar, a efectos de provisión del puesto, los puestos correspondientes a:*
 - a. *El servicio común de tramitación de la Audiencia Nacional.*
 - b. *Los servicios comunes de tramitación de las Audiencias Provinciales.*
 - c. *Las áreas que se constituyan.*
 - d. *Los equipos que se constituyan, cuando así lo establezca las relaciones de puestos de trabajo, y, en todo caso, siempre que el número de efectivos en el equipo sea igual o superior a 50.*
2. *La identificación de los puestos a que se refiere el apartado 1 de este artículo regirá para la asignación inicial de puesto al personal de la Administración de Justicia de nuevo ingreso, así como para su provisión temporal o definitiva conforme a lo previsto en la normativa vigente”.*

56.- Se modifica el artículo 39 bis relativo a la relación de puestos de los servicios comunes, la que deviene imprescindible pues en la LO 1/2025 se



afronta la transformación de los Juzgados en Tribunales de Instancia, con el apoyo de unas Oficinas Judiciales que han sido redefinidas y reestructuradas en servicios comunes que existirán en todas la Oficinas judiciales, y en otros servicios comunes que puedan constituirse.

57.- Los servicios comunes podrán subdividirse en áreas y equipos para facilitar el ejercicio de la función jurisdiccional. Así, el servicio común de tramitación ha sido configurado como un servicio común necesario de la Oficina judicial, que puede concurrir o no con otros servicios comunes. En aquellos supuestos en los que concurra con otros servicios comunes se reserva, en todo caso, a este servicio común la ordenación de procedimientos declarativos y, en este ámbito, la asistencia a jueces y juezas, pudiendo derivarse a los demás servicios comunes otras funciones.

58.- Esta previsión ha sido recogida en el Acuerdo de 8 de enero de 2025 el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y organizaciones sindicales, según el cual el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en el ejercicio de sus competencias organizativas y para el adecuado diseño de las oficinas judiciales podrá crear áreas, aun cuando estas asistan a órganos de diferentes secciones u órdenes jurisdiccionales. No obstante, cuando en un Tribunal de Instancia el número de plazas judiciales de una misma sección sea igual o superior a doce se creará al menos un área en el servicio común de tramitación para la ordenación de los procedimientos de que conozcan, que se podrá extender también a los que correspondan a otras secciones del mismo orden jurisdiccional.

59.- A este fin, conviene destacar que el diseño de las correspondientes Oficinas Judiciales de los Tribunales de Instancia no puede ser homogéneo, lo cual no obsta a que ciudades en que existan tribunales de instancia con secciones especializadas, el servicio común de tramitación se organice mediante áreas, una por cada sección del Tribunal de Instancia, o una para más de una sección; y dentro de cada área que se creen equipos, uno por cada juez, jueza o magistrado y magistrada, ocupándose cada equipo de la tramitación íntegra de los correspondientes procedimientos competencia del mismo, y distribuyéndose el trabajo por terminaciones del número de asuntos, como método que se considera más eficiente y eficaz para la tramitación de asuntos; para así intentar superar las deficiencias en la tramitación procesal que se han evidenciado en la experiencia de la implantación de la NOJ.

60.- Es por ello que la nueva redacción se adapta a la previsión de la LO 1/2025, en el sentido de que la relación de puestos de trabajo de los servicios comunes que radiquen en el mismo municipio deben identificar, a los efectos de provisión del puesto, los puestos correspondientes: a) El servicio común de tramitación de la Audiencia Nacional; b) Los servicios comunes de tramitación de las Audiencias Provinciales; c) Las áreas que se constituyan;



y d) los equipos que se constituyan, cuando así lo establezca las relaciones de puestos de trabajo, y, en todo caso, siempre que el número de efectivos en el equipo sea igual o superior a 50.

61.- Sin embargo, de la enumeración que se realiza en el precepto sorprende la ausencia de regulación referida al Tribunal Supremo, lo que supondrá en la práctica mantener a la organización del Alto Tribunal en un limbo jurídico difícilmente explicable. Sin duda, ha de aprovecharse esta ocasión para regular también la nueva organización, de manera que, al igual que en el resto de los órganos judiciales, en el Tribunal Supremo deberá implementarse el modelo de oficina judicial, de forma que se regulen dos servicios comunes: 1) el de registro, reparto y, eventualmente, digitalización (se trata de un órgano de instancia en la Sala Tercera y Salas especiales) y 2) de tramitación. Debiendo ambos incorporarse a la regulación del artículo 39 bis. 1.

62.- Esta identificación de los puestos de trabajo regirá para la asignación inicial de puesto al personal de la Administración de Justicia de nuevo ingreso, así como para su provisión conforme a lo previsto en la normativa vigente.

63.- Además, se modifica el número 2 del artículo 39 bis a fin de que la atribución de tareas en los respectivos puestos de trabajo sea conforme a los artículos 476, 477 y 478 LOPJ, a los que ya hemos hecho referencia. En cualquier caso, cabe hacer mención a, que según el art. 437 LOPJ, el servicio común de tramitación estará dirigido por un/a Letrado/a de la Administración de Justicia Director del mismo, de quien dependerán funcionalmente, si los hubiere, el resto de los Letrados/as de la Administración de Justicia y el personal destinado en los puestos de trabajo en que aquél o aquélla se ordene y que, en todo caso, deberá ser suficiente y adecuado a sus funciones. El LAJ-Director/a en coordinación con el Presidente/a o Magistrado/a respectivo podrá dar las órdenes oportunas al resto de LAJ teniendo en cuenta la organización de recursos humanos del Servicio Común de Tramitación. Igualmente corresponde a los/as Presidentes/as de los Tribunales de Instancia y a los Presidentes/as de Sección de los Tribunales de Instancia coordinar junto al LAJ-Director del Servicio Común de acuerdo al art. 436 LOPJ el funcionamiento del Tribunal pudiendo adoptar las resoluciones precisas que, desde el punto de vista organizativo, sean necesarias para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional y cumpliendo en el ámbito organizativo y funcional que les es propio, las órdenes y circulares que reciba de sus superiores jerárquicos.

64.- El LAJ Director/a del Servicio Común coordinará a los /as Letrados/as de la Administración de Justicia que la integren, en el ejercicio de las funciones de dirección técnico-procesal y demás previstas en la Ley que estos desempeñan en relación con el resto de servicios comunes -artículo 437.5 LOPJ-. Y necesariamente, con el/la Secretario/a Coordinador/a Provincial para la eficaz ejecución de los criterios generales que se deberán seguir en el Servicio Común de Tramitación. Asimismo, deberá hacer cumplir en el ámbito



organizativo y funcional que le es propio, las órdenes y circulares que reciba de sus superiores jerárquicos.

65.- En el ámbito jurisdiccional, responderán del estricto cumplimiento de cuantas actuaciones o decisiones adopten jueces, juezas o tribunales en el ejercicio de sus competencias. Dicho/a LAJ Director/a, se deberá coordinar con el/la Presidente/a del Tribunal, o en su caso con el de la respectiva Sección, para la eficaz ejecución de los criterios homogéneos generales y las instrucciones concretas y específicas, que se deberán seguir en los servicios comunes para el apoyo de sus funciones y de un correcto ejercicio de la función jurisdiccional. A tal efecto, podrá impartir las órdenes oportunas al personal de la Administración de Justicia que la integra, sin perjuicio de las instrucciones que pudieran dictarse al efecto por este órgano constitucional. Llegados a este punto, se echa en falta ante todas las referencias a la coordinación entre los Letrados y Secretarios Coordinadores una solución a los problemas que pudieran plantearse, en los casos en los que esa coordinación no fuera posible o, más concretamente, en el caso de discrepancias entre aquellos y los Presidentes/as de los Tribunales de Instancia. Para estos supuestos, que en la práctica no son infrecuentes, se propone que las decisiones de los Presidentes/as sean ejecutivas, sin perjuicio de la correspondiente revisión por la Sala de Gobierno del TSJ correspondiente

66.- Para flexibilizar su funcionalidad y adaptarse a cada órgano judicial, el servicio común de tramitación, según el art. 436.7 LOPJ, podrá subdividirse en áreas y equipos dirigidos por LAJ y funcionarios/as de los cuerpos generales conforme se establezca en las relaciones de puestos de trabajo.

67.- Además, se mantienen los servicios comunes procesales, que también se podrán subdividir en áreas, si bien en estos servicios no realizarán funciones de ordenación del procedimiento. En el artículo 436 LOPJ se contiene una regulación general de los servicios comunes, de su ámbito de actuación, de las bases de la organización interna de estos servicios comunes y de las funciones de coordinación que deben asumirse por parte de las personas que ejerzan la dirección del servicio común de tramitación y de los demás servicios comunes que puedan existir en la Oficina judicial. Estarán dirigidos por un Letrado o Letrada de la Administración de Justicia a quien la ley atribuye la dirección técnico-procesal y coordinación de los Letrados y las Letradas que la integran.

68.- Pues bien, en consonancia con esta organización, el artículo 521 LOPJ prevé que las relaciones de puestos de trabajo identificarán aquellos puestos cuya actividad sea compatible en distintas unidades de la Oficina judicial y a la vez con puestos de trabajo de las Oficinas de Justicia en los municipios u Oficinas de Registro Civil. También, se incluye una nueva definición de ubicación del puesto de trabajo que permite su desvinculación del lugar físico



en el que se presten los servicios y da luz verde a los puestos de trabajo deslocalizados.

69.- Por último, se introduce un número 2 al artículo 39 bis para que la identificación de los puestos de trabajo de los servicios comunes que radiquen en el mismo municipio, a efectos de provisión de puestos de trabajo, regirá para la asignación inicial de puesto al personal de la Administración de Justicia de nuevo ingreso, así como para su provisión temporal o definitiva conforme a lo previsto en la normativa vigente.

A.3 Artículo 64. Reglas generales que regirán las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo

"En todo caso, las modificaciones que se produzcan de las relaciones de puestos de trabajo deberán tener en cuenta los principios contenidos en la LO 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la LOPJ, para la distribución y reordenación de efectivos y, en concreto, las reglas establecidas en el artículo 523 LOPJ".

70.- Es objeto de modificación el artículo 64 en el que se regulan las reglas generales que regirán las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo, y ello en atención a que por LO 1/2025, se ha reformulado el art. 523 LOPJ relativo a la modificación de las relaciones de puestos de trabajo. Este precepto básicamente se modificó para introducir que son las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Justicia quienes pueden, en sus respectivos ámbitos, cambiar las relaciones de puestos de trabajo, previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas. Además, se prevé que para la modificación de la relación de puestos de trabajo que corresponda a una Comunidad Autónoma, es preceptiva la comunicación previa al Ministerio de Justicia, y se elimina la exigencia de que se haya de requerir informe previo al Consejo General del Poder Judicial, aunque se considera necesario el informe de éste.

A.4 Artículo 75. Sustitución en las Oficinas de Justicia en los municipios, Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios

1. *En las Oficinas de Justicia en los municipios en que preste servicio personal de la Administración de Justicia, en los casos de vacante, permisos, vacaciones o licencias, las sustituciones se realizarán con arreglo al siguiente orden:*
 - a. *Funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, siempre que reúna los requisitos establecidos para el puesto de trabajo y no haya funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.*
 - b. *Funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, siempre que reúna los requisitos establecidos*



para el puesto de trabajo y no haya funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

2. *Cuando no sea posible la sustitución en los términos establecidos en el apartado anterior, podrá conferirse comisiones de servicio sin relevación de funciones y por el tiempo indispensable, a los titulares de las Secretarías de Oficinas de Justicia en los Municipios, o de las agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios de las localidades más próximas.*

71.- Se modifica el artículo 75, pasando de “*Secretarías de Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz*” a “*Oficinas de Justicia en los municipios, Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios*”, lógica consecuencia de la creación de las Oficinas de Justicia. Ante la falta de previsión de medidas económicas para este fin y su encomienda a los Ayuntamientos, este órgano constitucional tiene temores fundados de que la actual situación de precariedad y abandono en la que se encuentran muchos de estos servicios se puede perpetuar, quedando en un simple cambio de denominación por lo que llamamos la atención sobre este particular. Además, cabe tener en cuenta de forma destacada que, dado que la Ley Orgánica 1/2025 no modificó el artículo 99 de la ley Orgánica del Poder judicial y que, por lo tanto, las oficinas municipales de justicia se establecerán en todas las localidades donde no haya tribunales de instancia, con independencia del número de habitantes que tenga. Teniendo en cuenta que una de las funciones que se le encomienda a estas oficinas, es la de dar servicio e información a los ciudadanos, se considera recomendable establecer mecanismos de acreditación, suficientes como para evitar intrusismos y accesos de personas no legitimadas.

A.5 Disposición transitoria primera. Proceso de acoplamiento de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia

Aprobadas las relaciones iniciales de puestos de trabajo de cada centro de destino por el ministerio y las comunicades autónomas con competencias en materia de Justicia, se procederá al acoplamiento de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia con destino definido en dichos centros en el ámbito territorial respectivo.

Ningún funcionario o funcionaria verá disminuidas las retribuciones complementarias fijas que viniere percibiendo en el momento de iniciarse el proceso de acoplamiento si con ocasión de dicho proceso no pudiese ser confirmado en un puesto con similares características y pasase a desempeñar un puesto de trabajo genérico con retribuciones complementarias inferiores. El mantenimiento de estas retribuciones no podrá ser objeto de compensación ni absorción y se mantendrá mientras no se produzca un cambio de puesto de trabajo de forma voluntaria. Si en el proceso de acoplamiento un funcionario o funcionaria, en contra de su voluntad, no fuere



confirmado en un puesto que lleve aparejado la realización del servicio de guardia que hasta ese momento estuviere prestando, no perderá la retribución por el mismo, si bien estará obligado u obligada a su realización conforme a los turnos que se establezcan, salvo que renunciare expresamente a su retribución. Esta situación se mantendrá mientras no se produzca un cambio de puesto de trabajo de forma voluntaria.

Tales turnos de guardia permitirán que los funcionarios y funcionarias a quienes se venía certificando las guardias continúen haciéndolas con la misma frecuencia, salvo que un incremento en el número de efectivos obligue a modificar esa frecuencia, por estar suficientemente garantizado el servicio.

El proceso de acoplamiento seguirá el siguiente orden:

- a) La convocatoria de procedimientos de libre designación para aquellos puestos que hayan de cubrirse por este sistema, en el que podrá tomar parte personal funcionario de otros ámbitos territoriales, en los términos previstos en el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia.*
- b) La convocatoria de concursos específicos para aquellos puestos de trabajo que haya de cubrirse por este sistema, en el que, por una sola vez, podrán participar en exclusiva los funcionarios destinados en el mismo municipio.*
- c) La confirmación del personal en los puestos de trabajo que viniesen desempeñando, cuando éstos figuren en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo con similar contenido aun con distinta denominación.*

Dicha confirmación se realizará teniendo en cuenta la distribución del personal destinado en sus juzgados o servicios comunes de origen, según su tipología, a fin de que se proyecte en los servicios comunes de destino en idéntica promoción.

Tendrán preferencia para ser confirmados en los nuevos puestos quienes tuvieran mayor antigüedad en el puesto de origen. Cuando no hubiere suficiente personal interesado en la asignación de puestos por confirmación, estos serán adjudicados a quienes tuvieran menor antigüedad en el puesto de origen. Cuando la antigüedad en el puesto de los afectados en el proceso de confirmación fuese la misma, la preferencia la tendrá el mejor puesto en el escalafón. En todo caso, se deberá respetar la distribución proporcional prevista en el párrafo anterior.

Salvo voluntad expresa de la persona afectada por la confirmación no se le podrá encomendar, en el destino adjudicado, tareas sobre materias que fueren propias de órganos judiciales de diferente clase a aquel en que estuviere destinado antes del acoplamiento. Esta limitación no se aplicará a quienes voluntariamente participen en un posterior concurso de traslado, en cuyo caso las funciones y tareas



vendrán definidas en las respectivas relaciones de puestos de trabajo y protocolos de funcionamiento de las oficinas.

- d) *La reordenación o redistribución de efectivos en supuestos de amortización, supresión o recalificación de puestos, con arreglo a los procedimientos establecidos en los artículos 64, 65, 66 y 67 de este reglamento.*

72.- En el Proyecto además se prevé respecto al régimen de acoplamiento de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en la Disposición transitoria primera, tratando no sólo el proceso de acoplamiento de los Letrados y Letradas de la Administración de Justicia, sino de los funcionarios de los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia. Semejante previsión se hace imprescindible a la vista de la Disposición final trigésima quinta de la LO 1/2025 *"El Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, deberá aprobar las modificaciones reglamentarias necesarias para la efectiva implantación de los Tribunales de Instancia, Oficinas Judiciales y Oficinas de Justicia en los municipios, en particular aquellas orientadas a facilitar el desarrollo del nuevo modelo organizativo y los procesos de acoplamiento de todo el personal.*

Tales modificaciones se harán previa negociación colectiva, cuando afecten a las materias previstas en el artículo 37 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre".

73.- Y así es como en el Acuerdo de 8 de enero de 2025 el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y organizaciones sindicales, se recoge como *"El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes garantiza que ningún funcionario o funcionaria vea disminuidas las retribuciones complementarias fijas que viniere percibiendo en el momento de iniciarse el proceso de acoplamiento si con ocasión de dicho proceso no pudiese ser confirmado en un puesto con similares características y pasase a desempeñar un puesto de trabajo genérico con retribuciones complementarias inferiores. El mantenimiento de estas retribuciones no podrá ser objeto de compensación ni absorción y se mantendrá mientras no se produzca un cambio de puesto de trabajo de forma voluntaria.*

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes garantiza también que, si en el proceso de acoplamiento un funcionario o funcionaria, en contra de su voluntad, no fuere confirmado en un puesto que lleve aparejado la realización del servicio de guardia que hasta ese momento estuviere prestando, no perderá la retribución por el mismo, si bien estará obligado a su realización conforme a los turnos que se establezcan, salvo que renunciare expresamente a su retribución.

Tales turnos de guardia permitirán que los funcionarios a quienes se venían certificando las guardias continúen haciéndolas con la misma frecuencia,



salvo que un incremento en el número de efectivos obligue a modificar esa frecuencia, por estar suficientemente garantizado el servicio”.

74.- En este punto un llamamiento cabe hacer al autor del proyecto en relación al personal de los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia que presta servicio en el Tribunal Supremo, pues hay una gran diferencia en términos retributivos respecto de quienes se hallan destinados en órganos judiciales gestionados por las Comunidades Autónomas con competencias transferidas y asumidas. Todo ello provoca que accedan al Alto Tribunal aquéllos y aquéllas que menos experiencia tienen y, en numerosos supuestos, con carácter interino. Esta situación ha de tenerse en cuenta en el proyecto al confeccionar y fijar las relaciones de puestos de trabajo del Tribunal Supremo, a fin de dotar a este órgano de los recursos humanos acordes a la categoría que el corresponde en nuestro organigrama jurisdiccional.

B. Modificación del Real Decreto 1033/2007, de 20 de julio, por el que se determinan los puestos tipo de las unidades que integran las oficinas judiciales y otros servicios no jurisdiccionales y sus correspondientes valoraciones, a efectos de complemento general del puesto de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia

75.- El Proyecto de Real Decreto objeto de informe modifica también el Real Decreto 1033/2007, de 20 de julio, por el que se determinan los puestos tipo de las unidades que integran las oficinas judiciales y otros servicios no jurisdiccionales y sus correspondientes valoraciones, a efectos de complemento general del puesto de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Así, el artículo 3, a fin de cambiar el tipo IV, respecto a los puestos adscritos a la oficina judicial de apoyo a Juzgados de Paz, por puestos adscritos a Oficinas de Justicia en los Municipios. Así como también la Disposición Adicional Primera para cambiar la referencia de los Secretarios de Juzgados de Paz por “*Puestos de trabajo en Secretarías de Oficinas de Justicia en los municipios*”. Con respecto a esta modificación cabe recordar que mediante la LO 19/2003 se reformó la LOPJ y, entre otras cosas, se creó el Cuerpo de Gestión Procesal, en el que quedaron integrados los funcionarios del anterior Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia. De conformidad con el artículo 476.1 i) LOPJ, reformado por LO 1/2025, corresponde a dicho cuerpo de funcionarios desempeñar la Secretaría de las Oficinas de Justicia en los municipios, así como los restantes puestos de trabajo adscritos, todo ello de conformidad con lo que se determine en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, así como desempeñar puestos de las unidades administrativas, cuando las relaciones de puestos de trabajo de las citadas unidades así lo establezcan, siempre que se reúnan los requisitos de conocimiento y preparación exigidos para su desempeño.

76.- Sería recomendable que dentro de esta regulación se incorpore previsiones específicas para aquellos centros de gestión y dirección, tales



como Presidencias de Tribunales Superiores y Secretarías de Gobierno, Audiencias Provinciales y Presidencias de Tribunales de Instancia donde deberían incorporarse puestos de trabajo singulares y de libre designación que, sin tener porqué pertenecer a los cuerpos propios de la Administración de Justicia, aunque sin excluirlos, pudieran prestar funciones de asistencia a sus titulares y cuya contratación iría ligada al mandato de la persona a la que sirvan dado que se trata de puestos de máxima confianza. De la misma manera, una buena Administración de Justicia hace que a los diferentes oficios ya existentes en la Administración de Justicia se incorporaran otros acordes con las exigencias de la nueva Justicia Electrónica, tales como informáticos, documentalistas, archiveros, periodistas, etc, que, sin perder su estatuto funcional, pudieran ejercer su función sin tener que incorporarse a alguna de las categorías funcionariales específicas de la Administración de Justicia, para lo cual se regularía una situación estatutaria funcional, con dependencia orgánica de la Administración que fuere y dependencia funcional de los Presidentes y Presidentas o Secretarios y Secretarías de Gobierno. Incluso debería estar previsto que los nuevos funcionarios que se incorporen al servicio de la administración de justicia, contaran con los conocimientos suficientes en informática dado el protagonismo indiscutible y potenciado expresamente por la Ley de esta herramienta

77.- Y finalmente se modifica el Anexo I, donde se recoge la relación de subtipos, específicamente el subtipo A, para decir que pertenecen al subtipo A los puestos adscritos a las siguientes unidades y oficinas de la Administración de Justicia:

1. Los servicios comunes de la Oficina Judicial.
2. Unidades administrativas.
3. Agregando las Oficinas del Registro Civil y la Oficina Fiscal.

78.- Esto se hace ineludiblemente necesario a la vista de que, como consecuencia de que el modelo de organización judicial basado en el tradicional Juzgado unipersonal ha venido condicionando las posibilidades de lograr un servicio público de Justicia más eficiente, la creación progresiva y escalonada de nuevos órganos judiciales, las medidas de refuerzo y el aumento en la dotación de medios personales y materiales no resultaron eficientes porque diluyeron responsabilidades, se ha hecho necesaria la transformación de los Juzgados en Tribunales de Instancia, con el apoyo preciso de unas Oficinas judiciales que se redefinen y reestructuran únicamente en servicios comunes (SERCO), y a la vez que se hace desaparecer las unidades procesales de apoyo directo (UPAD), y ni siquiera se llegan a crear las proyectadas unidades procesales de tramitación (UTARM).

79.- Pero también es preciso tomar en consideración que lo que se ha podido venir a denominar como la nueva configuración de las "nuevas oficinas judiciales", hace que se vislumbre otro organigrama, cuando es un hecho que



la NOJ no se ha implantado en buena parte de los partidos judiciales y, cuando todavía estos funcionarios y funcionarias se están acostumbrando a las UPADs, Servicios comunes Generales y de Ejecución o los "non natos" Servicios de Ordenación del Procedimiento.

80.- También el Proyecto recoge modificaciones en lo relativo a los subtipos C y D, por razones obvias de adaptación a la Ley 1/2025, no mencionando ya la oficina judicial de apoyo a juzgados de paz y agrupaciones, para referirse a *"las Oficinas de Justicia en los municipios o a las agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios"*.

C. Modificación del Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función

81.- Por último, se modifica el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función, básicamente para adaptar el lenguaje inclusivo y las nuevas denominaciones, así como para mejorar las retribuciones, y ello en atención a que en su Disposición transitoria primera se hace constar que *"Hasta tanto no se produzcan los procesos de acoplamiento y nombramiento de los Secretarios Judiciales, para desempeñar puestos de trabajo incluidos en las relaciones de puestos de trabajo aprobadas conforme al nuevo modelo de oficina judicial previsto en la LO 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, continuarán vigentes las retribuciones complementarias previstas en el real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales"*. En principio las retribuciones complementarias previstas en el RD 1130/2003 debían seguir devengándose hasta que se concluyeran los procesos de acoplamiento y nombramiento de letrados y Letradas de la Administración de Justicia (Secretarios Judiciales) para desempeñar los puestos de trabajo en la nueva Oficina Judicial. Sólo los Secretarios y Secretarias de Gobierno, Secretarios Coordinadores y Secretarias Coordinadoras Provinciales, Letrados y Letradas de la Administración de Justicia (Secretarios Judiciales) destinados en el Ministerio de Justicia y los destinados en partidos judiciales con un solo Juzgados de Primera Instancia e Instrucción verían retribuidos sus servicios con arreglo a la norma proyectada desde el momento de su entrada en vigor. Se ha tratado de una medida razonable y adecuada, dado el papel que han de desempeñar los Secretarios y Secretarias de Gobierno y los Coordinadores y Coordinadoras Provinciales en el despliegue de la Oficina Judicial.



82.- El Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, adecuaba este régimen retributivo a los principios y conceptos recogidos en la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, diseñada para fomentar la formación, el rendimiento y la asunción de responsabilidades. Adecuación que venía impuesta por la propia Ley 15/2003, en la medida en que su Disposición final tercera, daba al Gobierno un plazo de tres meses para que *“regulará el nuevo régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales adecuado a los principios y conceptos retributivos recogidos en esta ley y en sus anexos”*.

83.- A estos efectos de retribución de los y las LAJ, especialmente consideración hay que tener a la situación de los y las LAJ del Sala del Tribunal Supremo, pues su ascenso a la mayor categoría profesional, por un sistema de libre designación como el establecido para los Magistrados y Fiscales, no se corresponde con la remuneración que perciben, lo que ha llevado a situaciones ciertamente complejas, tales como que queden plazas desiertas o que únicamente se promuevan a esas plazas a solicitantes destinados en Madrid. Por ese motivo, en la valoración de los puestos de trabajo de los Letrados y Letradas de la Administración de Justicia con destino en el Servicio Común General y de Tramitación del Tribunal Supremo debería establecerse una cantidad retributiva proporcionalmente análoga a la función y órgano en el que estén, como sucede en el supuesto de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo y los y las Fiscales de la Fiscalía del Alto Tribunal. En concordancia con ello, el proyecto debería tomarlo en consideración procediendo a la modificación de los anexos I para adaptarlo a la denominada cláusula de enganche en lo relativo a los salarios de los LAJ, y el III o IV para incorporar la medida referida a los LAJ del Tribunal Supremo, cualquiera de las dos posibilidades sería factible. Si se realiza en el punto 3 sería conveniente añadirse seguidamente de 40 o más, de manera que se mantuviera el NIVEL I, pues es evidente que en el Alto Tribunal “no existirán otros servicios comunes en el partido judicial”, según la expresión del precepto. También cabe la posibilidad de añadir un punto 5 al ANEXO IV, referido a los letrados de la Administración de Justicia de Sala del Tribunal Supremo con adjudicación NIVEL I.

84.- Así pues, desde la aprobación de estas normas, consecuencia del proceso de modernización de la Justicia iniciado con el Pacto de Estado firmado el 31 de mayo de 2001, cabe sostener que se ha pretendido una equiparación entre el régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal y el establecido para los Secretarios Judiciales en cuanto a principios y conceptos retributivos, en el marco del nuevo modelo de Oficina Judicial que empezaba a diseñarse y que requería de reformas organizativas de las relaciones profesionales y estructuras de trabajo, con el diseño de nuevos modelos de carrera que precisaban, a su vez, de cambios del modelo retributivo.



85.- La adecuación retributiva resulta coherente con el papel protagónico que corresponde a los Letrados y Letradas de la Administración de Justicia en la dirección de la Oficina Judicial, y su importante participación en actuaciones procesales, además que adecuado al fin del desarrollo de la LO 1/2025 que se pretende.

D. Reglamento de las Oficinas de Justicia en los municipios y de las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios

86.- En el Capítulo II del Proyecto de Real Decreto se aprueba el Reglamento de las Oficinas de Justicia en los municipios y de las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios, desarrollando la regulación contenida en los artículos 439 ter, 439 quater y 435 quinquies de la LOPJ. De hecho, en su artículo 1 se define en este sentido el ámbito de aplicación al decir *“El presente Reglamento se aplicará a las Oficinas de Justicia en los municipios y a las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios reguladas en los artículos 439 ter, 439 quater y 439 quinquies de la LOPJ, que se constituyan por transformación de los Juzgados de Paz y Agrupaciones de las Secretarías de Juzgados de Paz en los términos previstos en la disposición transitoria sexta de la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.*

También se aplicará a aquellas otras Oficinas de Justicia en los municipios ya las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los Municipios que se constituyan con posterioridad a esta transformación”.

87.- Por Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en su título primero se acomete la reforma organizativa de la Administración de Justicia en todos sus ámbitos, mediante la creación y constitución de los Tribunales de Instancia y la evolución de los Juzgados de Paz a Oficinas de Justicia en los municipios. El legislador terminó con lo ya intentado en el Proyecto de LO de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, por la que se modifica la LOPJ, para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, aprobado en fecha de 12 de abril de 2022, que se hallaba próximo al trámite de votación en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados cuando el 29 de mayo de 2023 fueron disueltas anticipadamente las Cortes Generales y convocadas elecciones generales. En lo que respecta a las Oficinas de Justicia se crea en la LOPJ un nuevo capítulo IV del Título I del Libro V, bajo la rúbrica “De las Oficinas de Justicia en los municipios”, integrado por tres artículos.

88.- La desaparición de los Juzgados de Paz supone un cambio muy importante dada la tradición de los mismos. Su figura existe en el ordenamiento jurídico español desde 1855 y en la realidad jurídica española desde el 1 de enero de 1857, fecha en que fueron nombrados los primeros. Originariamente, los jueces de paz fueron concebidos por la LEC con la



finalidad de asumir las competencias jurisdiccionales que, hasta ese momento, desempeñaban los alcaldes. Se ocupaban así de resolver controversias de escasa cuantía en materia civil, y del enjuiciamiento de las faltas en el ámbito penal. Aun siendo cierto que la función de los jueces de paz, desde su concepción originaria en el siglo XIX, ha quedado muy reducida en la actualidad, resulta obligado reconocer que los mismos han desarrollado una función esencial a lo largo de todo este período sin la que no habría sido posible la extensión de la Administración de Justicia a todos los territorios ni, por ende, la articulación del Estado en zonas rurales.

89.- No será hasta la entrada en vigor de la Ley de Bases de Justicia Municipal, de 19 de julio de 1944, cuando se restablecen definitivamente los mismos, aunque limitándolos a aquellos municipios donde no existiesen juzgados municipales ni comarcales. La Ley de Bases de 28 de noviembre de 1974, por la que se unificaron los Juzgados Municipales y los Comarcales bajo la denominación genérica de Juzgados de Distrito, estableció los Juzgados de paz en todos los municipios. Posteriormente, por Decreto de 29 de julio de 1977, se dispone el mantenimiento de éstos en los municipios donde no existieran juzgados de distrito. Terminando con nuestra LOPJ, donde se procedió a la supresión de los juzgados de distrito, pero manteniendo la vigencia de los juzgados de paz en aquellos municipios donde no existiesen juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

90.- Es así como, la LO 1/2025 introduce numerosas novedades en el ámbito de la Justicia, pero en relación con el ámbito municipal una muy destacada: la desaparición de los Juzgados de Paz, que pasan a ser sustituidos por las Oficinas de Justicia en los municipios, con la finalidad de facilitar el acceso a la Administración de Justicia y de disponer de servicios en todo el territorio. En este contexto se produce la creación de la Oficina de Justicia en el municipio, como una estructura administrativa que se nutre de las actuales secretarías de los Juzgados de Paz. Estas oficinas van a mantener los actuales servicios que son prestados por los juzgados de paz, pero dando un paso “más allá” en su evolución, ampliando el catálogo de gestiones dentro de la Administración de Justicia, y acercándola a todos los municipios. De esta forma, desaparece formalmente la figura de los juzgados de paz.

91.- Tal y como señala la propia Exposición de Motivos “*constituye un objetivo de esta reforma evitar que quienes se encuentran en estos municipios tengan que desplazarse a las capitales para realizar aquellas gestiones ante la Administración que actualmente tienen que llevar a cabo presencialmente, dotando a estas Oficinas de Justicia de los medios tecnológicos necesarios para la práctica de actos procesales y la intervención en los mismos a distancia*”.

92.- Es en el artículo 439 ter en el que se definen las Oficinas de Justicia en los municipios como aquellas unidades que, sin estar integradas en la estructura de la Oficina judicial, se constituyen en el ámbito de la



organización de la Administración de Justicia para la prestación de servicios a la ciudadanía de los respectivos municipios.

93.- Su existencia se prevé en los municipios en los que no tenga su sede un Tribunal de Instancia, en ellos existirá una Oficina de Justicia, que prestará servicios en la localidad donde se encuentre ubicada. En ella el juez o jueza de paz dispondrá de recursos y espacios suficientes y adecuadamente señalizados, de conformidad con el modelo previsto en la ley, a cuyos efectos deberá analizar el papel del ayuntamiento del territorio respectivo.

94.- Su constitución se regula en el artículo 2 del Proyecto de Reglamento de Oficinas de Justicia, dejándolo en manos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, dentro de sus respectivos ámbitos. Y en el artículo 3 se hace referencia a la dotación de personal al servicio de la Administración de Justicia en las Oficinas de Justicia en el municipio y en las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios, referenciando que será la que determinen las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, que aprobarán y, en su caso, podrán modificar las Administraciones públicas con competencias en materia de justicia, previa negociación sindical.

95.- Según el artículo 6 la dependencia funcional del personal de la Administración de Justicia destinado en Oficinas de Justicia en los municipios o en Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios, es al Juez o Jueza de Paz del municipio, a quien asistirá en las funciones atribuidas legalmente. El personal de estas Oficinas de Justicia dependerá orgánica y funcionalmente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes o de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia en el territorio.

96.- Esto mismo se complementa con lo previsto en el artículo 4 relativo al régimen de funcionamiento de las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios, en el que se prevé que el personal al servicio de la Administración de Justicia que preste sus servicios en una Agrupación de Oficinas de Justicia en los municipios extenderá el ejercicio de su actividad a cada una de estas Oficinas, conforme al régimen de atención que, en cada caso, determinarán las Administraciones públicas con competencias en materia de Justicia. Para el establecimiento de dicho régimen de atención, las Administraciones tomarán en consideración la coordinación con el personal funcionario, laboral o, en defecto de ambos, persona idónea designada por los Ayuntamientos para auxiliar al personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en la prestación de los servicios en ese municipio.

97.- El régimen de atención en las agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios incluirá el régimen ordinario de asistencia en la cabecera de la agrupación y el de los posibles desplazamientos a las restantes Oficinas de Justicia de esa demarcación.



98.- A tal efecto, por las Gerencias Territoriales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, o por el órgano competente de las Comunidades Autónomas, se elaborará un plan semestral de actividades y desplazamientos del personal destinado en las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los Municipios.

99.- Siguiendo con el modelo de los tradicionales Juzgados de Paz, la norma establece que las instalaciones y medios instrumentales de estas Oficinas estarán a cargo del Ayuntamiento respectivo. No obstante, en aquellos casos en los que se estimase conveniente su gestión total o parcial, se llevará a cabo por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes o la Comunidad Autónoma con competencias asumidas en materia de Justicia. Los sistemas y equipos informáticos de las Oficinas serán facilitados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes o la Comunidad Autónoma respectiva en los casos que tengan asumidas las competencias en materia de Justicia. La creación de las Oficinas y Agrupaciones se habrá de efectuar por resolución de la persona titular del centro directivo que tenga atribuida esta facultad en cada Administración con competencias en materia de Justicia. La resolución, en caso de las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios, determinará el régimen de funcionamiento y la Oficina de Justicia cabecera de agrupación. Pero se regula como trámite preceptivo, el que con carácter previo sean oídas las organizaciones sindicales más representativas y contar con el informe previo del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autónomas respectivas cuando estas no fueren las competentes para la creación de las mismas.

100.- En particular, se atribuye a los Ayuntamientos el nombramiento de personal funcionario laboral o, en defecto de ambos, persona idónea para auxiliar al personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en la prestación de los servicios en ese municipio, en el caso diferenciado de Oficinas de Justicia de los municipios integradas en agrupaciones que no estén dotadas con personal de la Administración de Justicia.

101.- Es por ello que se prevé en el artículo 5 que al personal de la Administración de Justicia destinado en Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios le será de aplicación el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, cuando se desplacen fuera del término municipal donde radique la Oficina de Justicia cabecera de la agrupación, para realizar las funciones propias de la Agrupación. También resultará de aplicación al personal de Oficinas de Justicia en los municipios no integradas en la agrupación, cuando por razones de servicio deban desplazarse fuera del término municipal donde radique la Oficina de Justicia que constituya su centro de destino. El pago de estas indemnizaciones corresponderá al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las



Cortes o a las Comunidades autónomas con competencias transferidas en cada caso.

102.- El incremento de gasto que puede suponer a los Ayuntamientos el despliegue del nuevo modelo deberá sufragarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Para ello deberán establecer el correspondiente crédito para subvencionar a los ayuntamientos por la atención de los conceptos regulados en la norma y, en su caso, del personal dependiente de éste que preste servicio en estas Oficinas de Justicia. La cuantía de la subvención se establecerá en función del número de habitantes de derecho del municipio.

103.- No obstante, cuando se trate de ayuntamientos pertenecientes a CCAA en las que se haya efectuado el traspaso de funciones de la Administración del Estado en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, dicha subvención se dotará y librára por la correspondiente CA a los ayuntamientos de su respectivo territorio.

104.- Todo ello sin perjuicio de lo contemplado en la Disposición transitoria decimotercera de la norma respecto al régimen transitorio de las subvenciones a los ayuntamientos, destinadas a la atención de los gastos de sostenimiento de los Juzgados de Paz, incluidas en los Presupuestos Generales del Estado.

105.- El artículo 439 quater enumera los servicios que se prestarán desde estas Oficinas de Justicia en los municipios, con una amplitud muy superior a los desarrollados en la actualidad por los Juzgados de Paz. De hecho, articula un sistema dual en relación con los servicios que corresponden a las Oficinas de Justicia en los municipios, estableciendo el citado precepto, servicios básicos, por una parte, y servicios avanzados, por otra. Así, además de asumir la práctica de los actos de comunicación procesal que deban entenderse con quienes residan en el municipio, estas oficinas prestarán, entre otros, servicios de colaboración con el Registro Civil y con las unidades de medios adecuados de solución de controversias y de gestión de solicitudes de la ciudadanía relacionadas con la Administración de Justicia.

106.- Con estas nuevas oficinas de justicia en el municipio, se pretende:

- Completar la estructura organizativa encaminada a garantizar un servicio público de Justicia de calidad, siendo fundamental la mejora en la gestión de los recursos humanos y materiales que se aplican para ofrecer nuevos y mejores servicios a las personas que habitan en los municipios menos poblados a través de una atención más próxima y cercana.
- Se potencia eliminar los desplazamientos innecesarios, para evitar que quienes se hallen en pequeños municipios tengan que desplazarse a las capitales para realizar aquellas gestiones ante la Administración



que actualmente tienen que llevar a cabo presencialmente, dotando a estas Oficinas de Justicia de los medios tecnológicos necesarios para la práctica de actos procesales y la intervención en los mismos a distancia.

- Se impulsa la utilización de medios tecnológicos, como consecuencia del afianzamiento del expediente judicial electrónico, la digitalización de las oficinas judiciales, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la información, la experiencia acumulada tras el desarrollo de la prestación del servicio de forma telemática, que facilitarán el acceso de la ciudadanía a los expedientes judiciales o su participación en actuaciones procesales.
- Se potencia el trabajo deslocalizado para personal funcionario o profesionales, lo que redunda, en la eficacia del trabajo, el ahorro de costes, y la reducción de la huella ecológica al evitar un gran número de desplazamiento a los Tribunales.

107.- Aunque la reforma pueda interpretarse como un intento de suprimir la "Justicia de proximidad" al atribuir a los Tribunales de Instancia el conocimiento de algunas materias cuya competencia correspondía a los Juzgados de Paz, lo cierto es que con carácter general, esta nueva organización parece tratar de acercar de manera eficiente la Administración de Justicia a los ciudadanos, incluso en aquellas zonas con menos demografía ya que no sólo se prevé la creación de una Oficina de Justicia en todos aquellos municipios donde no tenga su sede un Tribunal de Instancia, de manera similar a los Juzgados de Paz sino que, la reforma conlleva un incremento de sus competencias administrativas que permitirá la agilización de trámites en muchos casos.

108.- Se trata de reajustar la estructura existente para atender las actuales demandas sociales, garantizando un servicio público accesible, a través de una atención más próxima y cercana, que evitará que los ciudadanos de todos los municipios tengan que desplazarse a las capitales para realizar aquellas gestiones ante la Administración que actualmente tienen que llevar a cabo presencialmente. No obstante, no se puede hacer de cualquier manera, para que ello sea factible toda reforma de la organización jurisdiccional debería ir precedida de un estudio demográfico serio. Tengamos en cuenta a este respecto que:

- En el año 2000, había 493 municipios con menos de 100 habitantes de un total de 8104 localidades.
- En 2022, existían 1344 municipios con menos de dicha cifra de habitantes, de un total de 8131. Se ha pasado, por consiguiente, de un 6,08% a un 16,52 %.
- Hay 32 provincias con municipios con menos de 100 habitantes.
- De ellas, Guadalajara tiene 174 municipios con menos de cien personas censadas; Burgos 161, Soria 115, Ávila 115, Teruel 93, Zaragoza 83, Salamanca 83, Segovia 77, Cuenca 76 y Palencia 74. En todos los



casos, el porcentaje de municipios poco poblados es muy significativo en relación con el total de municipios de la respectiva provincia.

- Asimismo, se constata que todas las provincias citadas están en tres Comunidades Autónomas: Castilla-León, Castilla-La Mancha y Aragón.

109.- En el Informe del Defensor del Pueblo de 2018 se resalta que, según la monografía publicada en febrero de 2019 por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, la población española se ha multiplicado por 2,5 desde 1900, pero un setenta por ciento de municipios ha perdido residentes, por lo que se ha producido un proceso de urbanización y el porcentaje de población que vive en núcleos urbanos ha pasado del cincuenta por ciento al ochenta y siete por ciento. Por tanto, en las zonas rurales sólo permanece el trece por ciento de la población.

110.- Como se puede comprobar, se tiene que enfrentar una realidad, consecuencia de la previsión del artículo 99 LOPJ (*"En cada municipio donde no exista Tribunal de Instancia, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un juez o una jueza de paz"*), y es que en buena parte del territorio, municipios extremadamente poco poblados, por el simple hecho de serlo, deberán tener un juez o una jueza de paz; mientras en otras partes del territorio nacional, poblaciones densamente pobladas tendrán solamente un Juez o Jueza de Paz.

111.- También cabe no olvidar, en cuanto al papel que puedan jugar las nuevas tecnologías para no alejar al ciudadano de la justicia que, generalmente, cuando hablamos de zonas menos pobladas, resulta que, los habitantes de esas áreas suelen ser de edad avanzada, por ello, se debe cuidar que la brecha digital no prive al ciudadano de un derecho fundamental y de un servicio público esencial. Además, a esto se le añade que el acceso de las personas mayores al servicio público de Justicia, reforzándose la atención, el apoyo y el trato que puedan recibir en las Oficinas Judiciales y en las Oficinas de justicia de los municipios, se conjuga mal con el trabajo deslocalizado previsto para el personal funcionario o profesionales, que les va a permitir trabajar desde sus lugares de residencia, a fin de favorecer su conciliación familiar.

112.- Por ello, para que la mejora del servicio sea realmente efectiva y la asunción de competencias por parte de los Tribunales de Instancia no vaya en detrimento de los ciudadanos que residan en municipios alejados de aquellos tribunales, debe dotarse a estas Oficinas de los medios materiales y humanos necesarios para garantizar una adecuada prestación del servicio. En efecto, los poderes y servicios públicos deben estar presentes en todo el territorio nacional y ser accesibles a los ciudadanos. Las posibilidades de uso de los medios telemáticos y recursos informáticos no pueden sustituir siempre a la atención presencial, especialmente en aquellos supuestos en que la mayor parte de la población es de edad avanzada.



113.- Por último, el artículo 439 quinquies dispone que los puestos de trabajo de esas Oficinas se cubrirán por personal de los Cuerpos de funcionarios y funcionarias al servicio de la Administración de Justicia, con la posibilidad de que también se incluya personal de otras Administraciones Públicas, en atención a los diferentes servicios que se prestarán desde las mismas y conforme se disponga en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. De hecho, se incluye como especificación de las relaciones de puestos de trabajo de la Oficina Judicial la identificación de los puestos cuya actividad sea compatible en distintas unidades de la misma, y de aquellos cuya actividad sea compatible con la de las Oficinas del Registro Civil o las Oficinas de Justicia en los Municipios.

114.- Así bien, en el supuesto de las Oficinas de Justicia de municipios de más de 7.000 habitantes y aquellas otras en las que la carga de trabajo lo justifique, estarán servidas por funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, y su determinación corresponderá al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a las CCAA con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos.

115.- En todo caso, en las respectivas relaciones de puestos de trabajo se podrán incluir determinados puestos a cubrir con personal de otras Administraciones Públicas, siempre que reúnan los requisitos y condiciones establecidas en aquéllas. La Secretaría de estas Oficinas de Justicia será desempeñada por personal del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, conforme se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo, y a tal fin se modifica el art. 476 LOPJ.

116.- Hemos de tomar también en consideración que según lo previsto en el artículo 7 de la norma proyectada, sin perjuicio de las previsiones del apartado 3 del artículo 439 quinquies LOPJ para el establecimiento de agrupaciones de Oficinas de Justicia de municipios, las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán también promover y aprobar mecanismos de gestión colaborativa previstos en el artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local para la prestación del servicio en un conjunto de Oficinas de Justicia que carezcan de dotación de personal de la Administración de Justicia, a fin de que sean atendidas en común por un único funcionario municipal, de forma que los diferentes ayuntamientos puedan gestionar de forma colaborativa la prestación del indicado servicio.

117.- Por su parte, el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia destinado en puestos de trabajo cuya actividad sea declarada compatible realizará las tareas propias de la Oficina de Justicia en el municipio, así como las de la Oficina judicial correspondiente.

118.- En una norma que gira en torno a la eficiencia no podrían faltar criterios de racionalización y estructura organizativa en una mejor asignación de



recursos, de ahí que se contemple la figura de las agrupaciones de Oficinas de Justicia.

119.- A tal fin, bien el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes o bien las CCAA con competencias en materia de Justicia, en sus respectivos ámbitos, podrán adoptar la decisión de fijar agrupaciones de Oficinas de Justicia. El requisito establecido para ello es: que se trate de municipios limítrofes de un mismo partido judicial con la finalidad de la prestación a la ciudadanía de los servicios recogidos en la norma.

120.- En estos casos, será necesario establecer el municipio cabecera de la agrupación. Para la prestación de los correspondientes servicios, la Oficina de Justicia del municipio cabecera de la agrupación deberá estar dotada con personal de la Administración de Justicia, quien prestará sus servicios en todas las Oficinas de Justicia de municipio integrados en la referida agrupación, conforme al régimen de atención que determinarán, en cada caso, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes o las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia.

121.- La regulación contenida en la LO 1/2025, sobre las Oficinas de Justicia en municipios se completa con las previsiones normativas de aquellas comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia en cuyos estatutos de autonomía se les atribuyan competencias en materia de justicia de paz o de proximidad. Con este objetivo se introduce en la LOPJ, la disposición adicional vigésima quinta que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 152.2.3º, prevé que el nombramiento de los jueces y juezas de paz se hará en los términos previstos en los respectivos estatutos de autonomía en las referidas comunidades autónomas a las que se atribuyen tales competencias en materia de justicia de paz o de proximidad.

122.- La disposición transitoria sexta regula la implantación de las Oficinas de Justicia en los Municipios. La fecha límite será la fecha de constitución prevista para cada Tribunal de Instancia, momento en el cual los Juzgados de Paz se transformarán en Oficinas de Justicia en los municipios. Cuando estuvieren constituidas agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios a que hace referencia el apartado 3 del artículo 439 quinquies LOPJ. En este caso, el Juez o Jueza de Paz de cada municipio ejercerán las funciones que les atribuyen las leyes con la asistencia de la Oficina de Justicia correspondiente.

123.- Respecto al personal que se halle prestando servicios en los referidos juzgados, ya fuera como plantilla orgánica o incluidos en la correspondiente relación de puestos de trabajo de la Oficina Judicial de apoyo directo al Juzgado de Paz, pasará a integrarse en la relación de puestos de trabajo de la respectiva Oficina de Justicia en el municipio, que deberá ser aprobada, previa negociación sindical, en el plazo máximo de tres meses contados desde la entrada en vigor de la norma.



124.- No obstante, hasta que se elabore la relación de puestos de trabajo de cada Oficina de Justicia en el municipio, la Secretaría de esta Oficina corresponderá a quienes, al tiempo de su constitución, estuvieren ocupando la Secretaría del Juzgado de Paz o Agrupación de Secretarías, produciéndose el inmediato acoplamiento de toda la plantilla a los restantes puestos de trabajo genéricos.

125.- La Disposición transitoria duodécima, contempla el régimen transitorio hasta la creación de agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios reguladas en el apartado 3 del art. 439 quinquies LOPJ.

126.- De conformidad con la misma, en aquellos municipios que no cuenten con una Oficina de Justicia en el municipio servida por personal de la Administración de Justicia ni estén integrados en una agrupación de Oficinas de Justicia prevista en el apartado 3 del artículo 439 quinquies, la atención se prestará por la persona designada por el ayuntamiento, conforme a lo previsto en el último párrafo del referido apartado.

127.- En estos casos, la Oficina judicial del partido asumirá las tareas de coordinación y apoyo requeridas para la prestación de los servicios de Justicia en estos municipios, además de aquellas actuaciones cuya ejecución esté reservada a funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, en las que serán auxiliados por las referidas personas designadas por los ayuntamientos.

128.- El texto termina con una Disposición adicional, tres Disposiciones transitorias, una Disposición derogatoria y tres Disposiciones finales.

129.- En la disposición adicional única se prevé que las resoluciones que, al amparo de lo previsto en el párrafo tercero de la disposición transitoria quinta de la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de la Justicia, dicten las autoridades competentes para definición de la estructura de las oficinas judiciales en los territorios de su competencia, sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado, cumpliendo con ello la previsión normativa recogida en el artículo 6.1 d) del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial Boletín Oficial del Estado.

130.- La disposición transitoria primera mantiene las denominaciones Juzgados de Paz y Agrupaciones de Juzgados de Paz hasta la implantación de las Oficinas de Justicia en los municipios prevista en la disposición transitoria sexta de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

131.- En la disposición transitoria segunda se dictan algunas medidas sobre el régimen retributivo del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.



Al respecto se regula que durante el año 2025 y hasta que les resulte de aplicación el apartado dos del artículo tercero de este Real Decreto, el complemento específico transitorio de los/as Letrados/as de la Administración de Justicia a los que resulte de aplicación el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del cuerpo de Secretarios Judiciales, no podrá ser inferior a 7.820,04 euros. Se tiene que revisar su remisión, pues el artículo tercero no tiene apartado dos.

132.- Igualmente, durante 2025 y hasta el mismo momento, los/as Letrados/as de la Administración de Justicia a los que al entrar en vigor este Real Decreto ya les resultara de aplicación el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función, percibirán en todo caso en su complemento específico una cuantía sobre la establecida en el segundo párrafo del artículo 28.tres.3.a) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 de:

- Secretarías de Gobierno, de Coordinación Provincial y direcciones de servicios comunes: 5.508,00 euros.
- Puestos de servicios comunes, o con funciones en estos: 5.385,60 euros.
- Unidades procesales de apoyo directo y Letrados destinados en el Ministerio de Justicia: 5.263,20 euros.

133.- El complemento específico es único para cada puesto de trabajo y se destina a retribuir las condiciones particulares del mismo, conforme al artículo 447.3 b) LOPJ.

134.- En la disposición transitoria tercera se prevé el momento en que se producen los efectos económicos derivados de la modificación del Real Decreto 2033/2009, siendo a partir de la constitución de las Oficinas Judiciales en sus respectivos partidos judiciales.

135.- La disposición derogatoria única hace mención a la normativa derogada por la entrada en vigor de este Real Decreto, refiriéndose al Real Decreto 257/1993, de 19 de febrero, por el que se regulan las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, y las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el Real Decreto objeto de informe.

136.- La disposición final primera faculta a la persona titular del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que adopte las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución del Real Decreto, mediante Orden Ministerial o cualesquiera otras resoluciones que se pueda dictar al respecto.



137.- La disposición final segunda y tercera exponen, respectivamente, el título competencial y las previsiones sobre la entrada en vigor de la norma. Con carácter general, la entrada en vigor se producirá al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, previsión que estimamos adecuada para la consecución de sus objetivos, excepto en lo relativo a los efectos económicos derivados de la modificación del Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, según la Disposición transitoria tercera.

138.- En conclusión, la normativa presentada a informe es adecuada a los principios de buena regulación prevenidos en el artículo 129 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Además, y de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, es instrumento adecuado a los fines de mejorar la regulación del estatuto orgánico de las letradas y letrados y de los gestores y gestoras, tramitadores y tramitadora y auxilios judiciales de la Administración de Justicia.

VI.- CONCLUSIONES

PRIMERA.- El Proyecto de Real Decreto que se informa modifica el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, en varios preceptos, a saber, 39, 39 bis, 64, 75 y Disposición transitoria primera. Destacando la atribución de competencia, en el artículo 39, a los/as Secretarios/as Coordinadores/as, pues en este nuevo modelo de Oficina Judicial es preciso determinar que operador/a jurídico ha de dinamizar y gestionar la actividad organizativa. Las diferentes llamadas a la coordinación y colaboración ha de contener una previsión, en caso de desacuerdo, dando valor ejecutivo a las decisiones del Presidente o la Presidenta del Tribunal de Instancia que, en todo caso, podrán ser revisadas por la Sala de Gobierno del TSJ respectivo.

SEGUNDA.- Se hace preciso incluir en el artículo 39 bis, en la relación de puestos de los servicios comunes, al Tribunal Supremo, regulando que en éste debe implementarse el modelo de oficina judicial, de forma que se regulen dos servicios comunes: 1) el de registro, reparto y, eventualmente, digitalización, y 2) de tramitación.

TERCERA.- El Proyecto de Real Decreto modifica el Real Decreto 1033/2007, de 20 de julio, por el que se determinan los puestos tipo de las unidades que integran las oficinas judiciales y otros servicios no jurisdiccionales y sus correspondientes valoraciones, a efectos de complemento general del puesto de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Su modificación está básicamente encaminada a lograr un servicio público de la justicia más



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

eficiente a través de la transformación de los Juzgados en Tribunales de Instancia, con el apoyo necesario de unas Oficinas judiciales que se redefinen y reestructuran únicamente en servicios comunes (SERCO), a la vez que se hace desaparecer las unidades procesales de apoyo directo (UPAD), sin ni siquiera haberse llegado a crear las proyectadas unidades procesales de tramitación (UTARM). Sin embargo, por el proyecto se debe tomar en consideración que la NOJ no se ha implantado en buena parte de los partidos judiciales, y cuando todavía estos funcionarios y funcionarias se están acostumbrando a las UPADs, Servicios comunes generales y de ejecución, ya se vislumbra otro organigrama.

CUARTA.- También resulta modificado el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función, como se ha tenido ocasión de argumentar en el cuerpo del informe.

QUINTA.- En el Capítulo II del Proyecto de Real Decreto se aprueba el Reglamento de las Oficinas de Justicia en los municipios y de las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios, desarrollando la regulación contenida en los artículos 439 ter, 439 quater y 435 quinquies LOPJ. En él se prevé su existencia en aquellos municipios en los que no tenga su sede un Tribunal de Instancia, prestando sus servicios en la localidad en donde esté ubicada. También se podrán crear Agrupaciones de Oficinas de Justicia. La creación de ambas se habrá de efectuar por resolución de la persona titular del centro directivo que tenga atribuida esta facultad en cada Administración con competencias en materia de Justicia. A este fin, se debe hacer constar en alguna forma en el texto que esta reforma de la organización jurisdiccional debe ir precedida de un estudio demográfico.

Es cuanto tiene que informar el Consejo General del Poder Judicial.

Lo precedente concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste extendiendo y firmando la presente en Madrid, 04 de abril de 2025.

Miguel Hernández Serna
Secretario General,
(firmado electrónicamente)